Imprimir

Luego de la agitación social, cuyo estallido fue -entre otras cosas- el resultado de una reforma tributaria que proponía gravar huevos, gasolina y servicios públicos del estrato 4, el gobierno Duque dio algunas muestras de “arrepentimiento fiscal”, y junto con la caída del Ex Ministro Carrasquilla -el halcón económico de la derecha uribista- y la retirada de la Reforma Fiscal, prometió un nuevo “pacto” para lograr los consensos necesarios para adelantar “la reforma que el país necesita”.
Experto en frases y títulos pomposos para sus políticas, el gobierno de Duque habla ahora de “solidaridad Sostenible” de la “economía fraterna” y de otros artilugios de una muy pobre oratoria Unisergista, orientada a convencer a un público cada vez más escéptico e incrédulo, sobre las bondades de cobrar impuestos a los de abajo, para mantener los privilegios de los de arriba.

Tristemente para sus intereses, esta vez no funcionó: la propuesta de saqueo fiscal a las familias más pobres, fue entendida como tal por la inmensa mayoría de la población, a la cual no llegaron de manera evidente los “beneficios” de los programas de gobierno para enfrentar la pandemia, y desde el 28 de abril despegó un movimiento de inconformidad social que impulsado por la reforma tributaria develó lo que muchos hemos sabido por años y denunciamos de manera insistente, que Colombia es un país sumamente desigual, injusto y por tanto excluyente y violento, donde la principal violencia es la económica, la de los halcones de la derecha colombiana tan acostumbrados a la pobretología y las generalizaciones absurdas (como aquella que reza que el que es pobre es porque quiere).

Desatado el paro, el gobierno se ha dedicado a ignorar sus causas, a inventarse una nueva versión de “el tal paro no existe”, y ha insistido en una agenda legislativa y de “reformas económicas” -porque no reforman nada- que siguen el mismo libreto: una reforma al mercado de valores para darle más libertades a los fondos privados para usar el ahorro pensional a su antojo, sin garantizar pensiones, una sobretasa a la gasolina -que si bien ya existía- es totalmente inconveniente en el actual estado de la economía, y unas reformas a la estructura de la justicia y a la procuraduría que significan más gasto, especialmente más mermelada para sus aliados.

En materia tributaria el gobierno ha presentado un libreto “ajeno”: el de la ANDI. Reversar algunos -no todos- los beneficios que se otorgaron a manos llenas en 2019”, estos beneficios costaron en 2020 $9 billones, en 2021 ascenderán a $15 y en 2022 ascenderán a $22 billones, la misma cifra que pretendía recaudar Carrasquilla en su fallida reforma tributaria. La estrategia era la misma de todos los gobiernos uribistas: regalos al gran capital y tributos más duros para las inmensas capas de la ciudadanía.

El libreto fiscal del nuevo ministro Restrepo no es original por cuanto es el manual de emergencia que le pasó la misma ANDI: en medio de la agitación social y un entorno que se ha vuelto en contra de los empresarios, estos creen que devolver algunos regalos es suficiente. Ellos saben que la nuez del regalo tributario de Duque está en los regímenes especiales creados por la ley 2010, (MEGAINVERSIONES y Compañías Holding Colombianas) que les permiten jugosos beneficios a los grandes empresarios, y no en medidas menores como el descuento del ICA o la tarifa del Impuesto a la Renta, ellos saben que están entregando la parte menos valiosa como una forma de hacer creer a los colombianos que ese empresariado monopólico, ineficiente y abusivo realmente piensa en el interés general.

Por ello, el nuevo gobierno piensa en una reforma tributaria que recaudaría 14 billones, de los cuales apenas 4 irán a financiar el gasto social y los restantes 10 a financiar el servicio de la deuda pública, que en 2022 se estima que ascenderá a los 74 billones de pesos, cifra record en la historia fiscal del país. Es decir, en el fondo el libreto Carrasquilla no cambia: se requieren impuestos, no para el gasto social, o para enfrentar la crisis de hambre, pobreza y desempleo, sino para abonarle a la cuenta de los especuladores financieros, dueños de la mayor parte de la deuda pública del país, para ellos no hay “ajuste fiscal” ni “austeridad”.

El caso es que ambas cosas están íntimamente relacionadas: el gobierno nacional se ha vuelto adicto a la deuda, porque renuncia a cobrar impuestos, los gobiernos llegan comprometidos con poderosos sectores empresariales que también son adictos a las enormes ganancias que obtienen en parte, gracias a las bajísimas tasas de impuestos que pagan. Como no hay impuestos, el gasto hay que financiarlo con deuda, y la deuda es en sí misma un negocio que en muchos casos también beneficia a esos grandes sectores

empresariales (especialmente en el sector financiero) que compran títulos de deuda del gobierno con el ahorro de los trabajadores y trabajadoras, o pueden destinar sus cuantiosos excedentes a comprar deuda, a fin de cuentas, un negocio redondo.

La política fiscal de Duque no difiere (salvo en el monto del recaudo propuesto) de lo que hizo su ministro Carrasquilla, y antes de él todos los ministros que han llegado en los diferentes gobiernos, desde los lejanos años de Gaviria. Una política en favor de la especulación financiera y no del desarrollo nacional o del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.

Es por ello que cuando se reclama desde la sociedad civil y desde la oposición política en el Congreso que haya Renta Básica, Matrícula Cero, Empleo Garantizado, Derecho a Pensión, Salud Pública, la respuesta es: “no hay dinero”. Claro, todo está ocupado haciendo las delicias de los grandes capitales, circulando por el enorme casino de la deuda, mientras los colombianos del común deberán contentarse con limosnas.

Jairo Bautista

Foto tomada de: https://gatopardo.com/